



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RESOLUCIÓN NÚMERO 205 DE 2023

11 JUL 2023

Por la cual se designan delegados del Gobierno Nacional para la fase preliminar de alistamiento y para la Mesa de Diálogos de Paz con el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP, y se dictan otras disposiciones.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014, 1779 de 2016, 1941 de 2018 y 2272 de 2022.

CONSIDERANDO

Que el artículo 22 de la Constitución Política dispone que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento, y, de conformidad con los artículos 2°, 22, 93 y 189 de la misma, es obligación del Gobierno Nacional garantizar la plena eficacia del derecho a la paz.

Que el artículo 188 de la Constitución Política señala que el Presidente de la República simboliza la unidad nacional y, al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos.

Que de conformidad con el numeral 4° del artículo 189 de la Constitución Política, corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado.

Que el artículo 10 de la Ley 418 de 1997, modificada, adicionada y prorrogada por la Ley 2272 de 2022, establece que la dirección de la política de paz corresponde al Presidente de la República como responsable de la preservación del orden público en toda la Nación.

Que la honorable Corte Constitucional, en la Sentencia C-630 de 2017, señaló: "(...) los órganos políticos tienen amplio margen de discrecionalidad para diseñar mecanismos de solución pacífica de conflictos, como la negociación para lograr la sujeción al estado de Derecho de actores ilegales, con el fin de conseguir la paz, el cual sirve para enfrentar situaciones extremas o anómalas, como el conflicto armado interno padecido por el país por más de cincuenta años, en cuyo contexto derechos fundamentales como la vida, la libertad y la seguridad de las personas y en general los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de 1991, han resultado afectados".

Que el artículo 12 de la Ley 418 de 1997 señala que quienes participen en los acercamientos, diálogos o negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley, así como en la celebración de acuerdos de paz con autorización del Gobierno Nacional, no incurrirán en responsabilidad penal por razón de su intervención en los mismos.

Que mediante Resolución No. 339 de 2012, el Presidente de la República instaló una Mesa de Diálogos de Paz entre los representantes autorizados por el Gobierno Nacional y los miembros representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), de la cual se derivó el Acuerdo Final de Paz para la Terminación del Conflicto y una Paz Estable

Continuación de la Resolución: *"Por la cual se designan delegados del Gobierno Nacional para la fase preliminar de alistamiento y para la Mesa de Diálogos de Paz con el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP, y se dictan otras disposiciones"*.

y Duradera, suscrito el 24 de noviembre de 2016. Sin embargo, una facción de las FARC-EP, autodenominada Estado Mayor Central, decidió no suscribir el Acuerdo Final de Paz y continuó sus acciones como grupo armado organizado al margen de la ley.

Que de conformidad con el artículo 23 del Decreto 2647 de 2022, son funciones de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz: *"verificar la voluntad real de paz y de reinserción a la vida civil de los grupos armados al margen de la ley con motivaciones y/u orígenes políticos (...) con fin de determinar la formalización de diálogos y celebración de acuerdos de paz, de conformidad con lo que disponga el Presidente la República"* y *"definir los términos de las agendas de negociación y diálogo, dirigir los diálogos y firmar acuerdos con los voceros y representantes de los grupos armados al margen de la ley con motivaciones y/u orígenes políticos (...) tendientes a buscar la reinserción de sus integrantes a la vida civil o su tránsito al Estado de Derecho, de acuerdo con las órdenes que le imparta el Presidente la República"*.

Que, mediante la Resolución No. 176 del 10 de agosto de 2022, se autorizó al Alto Comisionado para la Paz para adelantar acercamientos exploratorios y contactos con representantes de grupos armados organizados al margen de la ley, con el fin verificar su voluntad real de paz, avanzar en la formalización de diálogos, y celebrar acuerdos, según los objetivos indicados por el Presidente de la República.

Que el 14 de noviembre de 2022, en desarrollo de la fase de exploración confidencial entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP, en presencia de delegados de la comunidad internacional, se acordó otorgar las garantías necesarias para la realización de una reunión interna de mandos, la elaboración de protocolos y la designación de los delegados de ese grupo con miras a iniciar conversaciones de paz.

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-069 de 2020, concluyó:

"[L]a paz, como finalidad del Estado y como derecho individual y colectivo exige que las autoridades encargadas de mantener el orden público busquen preferencialmente una salida negociada a los conflictos con las organizaciones al margen de la ley. Este deber supone que el legislador no restrinja injustificadamente las potestades presidenciales para buscar el diálogo. Con todo, a pesar de lo anterior, el deber de buscar una salida negociada no significa que el presidente no conserve una amplia discrecionalidad para determinar cómo, cuándo y con quién busca establecer diálogos, y cuándo debe usar el aparato coercitivo del Estado para proteger los derechos de las personas.";

Sin embargo, el ejercicio de la discrecionalidad presidencial para mantener el orden público supone que el jefe de gobierno cuente con todas las herramientas necesarias y suficientes para iniciar diálogos de paz cuando, y con quien, lo considere apropiado, sin necesidad del concepto previo y favorable de sus subalternos. Estos pueden y deben aconsejar al presidente, y proveerle todos los elementos de juicio necesarios para tomar una decisión. Sin embargo, en últimas, la decisión respecto del inicio de diálogos de paz con una organización al margen de la ley le corresponde única y exclusivamente al presidente como jefe de Estado y de gobierno. Por lo tanto, al restringir la potestad que tiene el presidente para buscar una salida negociada a los conflictos internos, la disposición demandada vulnera también los artículos 2º y 22 de la Constitución".

(...)

[e]s necesario concluir que, si ninguna autoridad pública puede conducir diálogos de paz sin autorización del presidente, a fortiori tales autoridades, al estar sujetos a las órdenes del presidente en la materia, tampoco puedan condicionar la potestad presidencial para decidir

Continuación de la Resolución: "Por la cual se designan delegados del Gobierno Nacional para la fase preliminar de alistamiento y para la Mesa de Diálogos de Paz con el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP, y se dictan otras disposiciones".

cómo, cuándo y con quiénes puede llevar a cabo tales diálogos. Estas decisiones son de naturaleza eminentemente política, y por lo tanto es el presidente, como representante de la unidad nacional y elegido mediante voto popular, quien debe tomar/as."

Que, en tal medida, es potestad constitucional del Presidente de la República decidir cómo, cuándo y con quiénes puede llevar a cabo diálogos y negociaciones para lograr el desarme y la desmovilización del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP, como responsable de la preservación del orden público en toda la Nación, y en tal medida del logro de la convivencia pacífica.

Que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP han adelantado acercamientos exploratorios y confidenciales, los cuales se llevaron a cabo entre noviembre de 2022 y julio de 2023, con la presencia de testigos internacionales del Reino de Noruega, la República de Irlanda, la Federación Suiza y el Reino de Suecia, al igual que las delegaciones de la Unión Europea, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la Misión de Acompañamiento de los Procesos de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA).

Que el Gobierno Nacional ha recibido comunicaciones mediante las cuales el campesinado, comunidades indígenas y afrocolombianas, organizaciones de víctimas y de juventudes, y procesos organizativos de carácter comunitario han solicitado que Gobierno Nacional y al autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP inicien una Mesa de Diálogos de Paz que permita asegurar sus derechos fundamentales, la verdad, la justicia y la reparación, y poner en marcha las transformaciones territoriales que garanticen la no repetición.

Que el Gobierno Nacional estima que el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP ha dado muestras de su intención de continuar aportando a la construcción de paz integral, estable y duradera, con justicia social y justicia ambiental. Adicionalmente, el 14 de junio de 2023 renovaron de forma pública su compromiso con la materialización de la política de *paz total* y con la instalación de una Mesa de Diálogos de Paz.

Que el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC-EP anunciaron, por medio de un comunicado conjunto del pasado 8 de julio de 2023, instalar una Mesa de Diálogos de Paz, la cual estará precedida por una fase preliminar de alistamiento, actualmente en desarrollo.

Que, en consideración a lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Designación del coordinador de los representantes del Gobierno Nacional. Designar a Camilo González Posso (C.C. 10.517.885), como representante del Gobierno Nacional para participar en la fase preliminar de alistamiento y en la Mesa de Diálogos de Paz con el Estado Mayor Central de las FARC-EP que estará dirigida a obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto a los derechos humanos, el cese de hostilidades y el pacto de acuerdos de paz tendientes a facilitar el desarme y la desmovilización del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP. El señor González Posso fungirá como coordinador de la delegación.

ARTÍCULO 2º. Designación de los representantes del Gobierno Nacional. Designar a Fabio Valencia Cossio (C.C. 8.288.000), Luz Dari Landázury Segura (C.C. 67.006.391), Carlos Murgas Guerrero (C.C. 7.410.93), Pedro José Arenas García (C.C. 13.362.964), Yesid Arteta Davila (C.C. 8.698.614), Gloria Quiceno Acevedo (C.C. 43.034.318), Feliciano Valencia Medina (C.C. 10.484.369), Darío Fajardo (C.C. 17.134.388), Oscar Gerardo Salazar Muñoz (C.C. 10.544.753), Coronel (r) Genny Calvo Olmos (C.C. 51.848.027) y Coronel (r) Luis Novoa (C.C. 19.335.891), como

Continuación de la Resolución: "Por la cual se designan delegados del Gobierno Nacional para la fase preliminar de alistamiento y para la Mesa de Diálogos de Paz con el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP, y se dictan otras disposiciones".

representantes del Gobierno Nacional para participar en fase preliminar de alistamiento y en la Mesa de Diálogos de Paz con el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP.

ARTÍCULO 3°. Designación del personal de apoyo. Designar a Germán David Rodríguez Obando (C.C. 1.030.616.153), asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, como profesional de apoyo en la fase preliminar de alistamiento y en la Mesa de Diálogos de Paz con el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP.

ARTÍCULO 4°. Comunicación. Comunicar a las autoridades competentes el contenido de la presente resolución.

ARTÍCULO 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada a los

11 JUL 2023

